



PROYECTO DE LEY 248 DE 2017 CÁMARA.

Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, mayores de edad.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. *Objeto.* La presente ley tiene por objeto establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma.

Artículo 2°. *Interpretación normativa.* La presente ley debe interpretarse a la luz de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los demás Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por Colombia que integren el bloque de constitucionalidad.

No podrá restringirse o menoscabar ninguno de los derechos reconocidos y vigentes en la legislación interna o en instrumentos internacionales, aduciendo que la presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 3°. *Definiciones.* Para efectos de la presente ley, se utilizarán las siguientes definiciones:

1. *Actos jurídicos.* Es toda manifestación de la voluntad y preferencia de una persona que genere efectos jurídicos.

2. *Actos jurídicos con apoyos.* Son aquellos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo, formal o informal.

3. *Titular del acto jurídico.* Se refiere a la persona mayor de edad, cuya voluntad y preferencia se manifiesta en un acto jurídico determinado.

4. *Apoyos.* Los apoyos de los que trata la presente ley son tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales.

5. *Apoyos formales.* Son aquellos apoyos reconocidos por la ley, que han sido formalizados por alguno de los procesos contemplados en la legislación nacional, por medio de los cuales se facilita y garantiza el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada, por parte del titular de un acto jurídico determinado.



6. *Apoyos informales.* Son aquellos mecanismos de asistencia que no se encuentran formalizados por alguno de los procesos contemplados en la legislación nacional, pero que facilitan y garantizan el proceso de toma de decisiones o el reconocimiento de una voluntad expresada de manera anticipada, por parte del titular de un acto jurídico determinado.

7. *Adjudicación de apoyos.* Es el proceso judicial por medio del cual se asignan apoyos formales a una persona con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal.

8. *Ajustes razonables.* Son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que las demás, de todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales.

9. *Directivas anticipadas.* Son un tipo de apoyo formal por medio del cual una persona, mayor de edad, puede tomar decisiones de manera anticipada a un hecho sobreviniente estipulado en la misma.

10. *Valoración de apoyos.* Es el proceso que se realiza con base en estándares técnicos que tiene como finalidad determinar cuáles son los apoyos formales e informales que requiere una persona para tomar decisiones relacionadas con su propio proyecto de vida.

11. *Comunicación.* El concepto de comunicación se utilizará en la presente ley para incluir sus distintas formas, incluyendo pero no limitado a, la lengua de señas colombianas, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso.

Artículo 4°. *Principios.*

1. *Celeridad.* Las personas que solicitan apoyos formales para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, tienen derecho a acceder a estos sin dilaciones injustificadas, por lo que los trámites previstos en la presente ley deberán tener una duración razonable y se observarán los términos procesales con diligencia.

2. *Dignidad.* En todas las actuaciones se observará el respeto por la dignidad inherente a la persona, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, a equivocarse y a su independencia.

3. *Autonomía.* En todas las actuaciones se respetará la autonomía de las personas con discapacidad, mayores de edad, que requieran apoyos para el ejercicio de su capacidad legal. La autonomía implica el derecho para autodeterminarse, conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias.

4. *No discriminación.* En todas las actuaciones se observará un trato igualitario a todas las personas sin discriminación por ningún motivo, incluyendo raza, etnia, religión, credo, orientación sexual,



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

género e identidad de género o discapacidad. La denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad constituye discriminación.

5. *Accesibilidad.* En todas las actuaciones, se identificarán y eliminarán aquellos obstáculos y barreras que imposibiliten o dificulten el acceso a uno o varios de los servicios y derechos consagrados en la presente ley.

6. *Igualdad de oportunidades.* En todas las actuaciones se deberá buscar la remoción de obstáculos que, configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 5°. *Presunción de Capacidad.* Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización de actos jurídicos.

En ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 1504 de la Ley 57 de 1887, quedará así:

¿Artículo 1504. *Incapacidad absoluta y relativa.* Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales, y no admiten caución. Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos¿.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 784 de la Ley 57 de 1887, quedará así:

¿Artículo 784. *Incapaces poseedores.* Los que no pueden administrar libremente lo suyo, no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal; pero no pueden ejercer los derechos de poseedores, sino con la autorización que compete. Los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para sí mismos, o para otros¿.

Artículo 8°. Modifíquese el ordinal 2° contenido en el artículo 62 de la Ley 57 de 1887, quedará así: ¿2°. Por el tutor o curador que ejerciere la guarda sobre menores de 21 años no sometidos a patria potestad¿.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 2346 de la Ley 57 de 1887, quedará así:

¿Artículo 2346. *Responsabilidad por daños causados por impúberes.* Los menores de diez años no son capaces de cometer delito o culpa; pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudieren imputárseles negligencia¿.



Artículo 10. *Menores de edad.* Las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les habilite a realizar.

CAPÍTULO II

Mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal

Artículo 11. *Ajustes razonables en el ejercicio de la capacidad legal.* Todas las personas con discapacidad, mayores de edad, tienen derecho a realizar actos jurídicos de manera independiente y a contar con apoyos para la realización de los mismos. La capacidad de realizar actos jurídicos de manera independiente se presume.

La necesidad de ajustes razonables para la comunicación y comprensión de la información, tales como intérpretes, guías intérpretes, dispositivos tecnológicos, entre otros, no desestima la presunción de la capacidad para realizar actos jurídicos de manera independiente.

Artículo 12. *Acciones de las personas de apoyo.* Entre las acciones que pueden adelantar las personas de apoyo para la celebración de actos jurídicos están los siguientes, sin perjuicio de que se establezcan otros adicionales según las necesidades y preferencias de cada persona:

1. Facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias de la o el titular del acto jurídico para la realización del mismo, habiendo discutido con la persona las consecuencias o implicaciones de sus actos.
2. Facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico a su titular.
3. Representar a la persona en determinado acto jurídico a través de poder o mandato.
4. Interpretar de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico, en los casos en que esta se encuentre absolutamente imposibilitada para interactuar con su entorno por cualquier medio.
5. Honrar la voluntad o preferencia de la o el titular del acto jurídico, establecida a través de una directiva anticipada.

Artículo 13. *Condiciones indispensables para realizar los apoyos.* Los apoyos para la realización de actos jurídicos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. *Necesidad.* Habrá lugar a los apoyos sólo en los casos en que la persona titular del acto jurídico los solicite o en los que, aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer de forma inequívoca la voluntad de la persona titular del acto jurídico.
2. *Primacía de la voluntad de la persona titular del acto jurídico.* Los apoyos utilizados para celebrar un acto jurídico deberán siempre responder a la voluntad de la persona titular del mismo. En los casos en los que, aún después de haber agotado todos los ajustes razonables disponibles, no sea posible establecer la voluntad de la persona de forma inequívoca, se usará el criterio de la mejor



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

interpretación de la voluntad, el cual se establecerá con base en la trayectoria de vida de la persona, previas manifestaciones de la voluntad en otros contextos, información con la que cuenten personas de confianza, la consideración de sus preferencias, gustos e historia conocida, nuevas tecnologías disponibles en el tiempo, y cualquier otra consideración pertinente para el caso concreto.

3. *Correspondencia.* Los apoyos que se presten para tomar decisiones deben corresponder a las circunstancias específicas de cada persona.

4. *Duración.* Los apoyos utilizados para celebrar un determinado acto jurídico deberán ser instituidos por períodos de tiempo definidos y podrán ser prorrogados dependiendo de las necesidades de la persona titular del mismo. Ningún apoyo podrá establecerse por períodos superiores a los establecidos en la presente ley.

5. *Imparcialidad.* La persona o personas que presten apoyo para la realización de actos jurídicos deben, en el ejercicio de sus funciones como apoyo, obrar de manera ecuánime en relación con dichos actos. Ello implica, entre otras cosas, que las personas que prestan apoyo deben actuar en congruencia con lo establecido en el numeral segundo de este artículo, respetando siempre la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico, con independencia de si quien presta apoyo considera que debería actuar de otra manera, respetando también el derecho a tomar riesgos y cometer errores.

Así mismo, las personas que prestan el apoyo no podrán influenciar indebidamente la decisión. Se considera que hay influencia indebida cuando la calidad de la interacción entre la persona que presta el apoyo y la que lo recibe presenta señales de miedo, agresión, amenaza, engaño o manipulación.

CAPÍTULO III

Acceso a los mecanismos de apoyo para la realización de actos jurídicos

Artículo 14. *Mecanismos de apoyo para la realización de actos jurídicos.* Los apoyos para la realización de actos jurídicos podrán ser establecidos por medio de tres mecanismos:

1. A través de la celebración de un acuerdo de apoyo entre la persona titular del acto jurídico para el que se requiera apoyo y las personas naturales mayores de edad o jurídicas que prestarán apoyo en la celebración del mismo.

2. A través de un proceso de jurisdicción voluntaria o verbal sumario, según sea el caso, para la designación de apoyos, denominado proceso de adjudicación de apoyos;

3. A través de una o varias directivas anticipadas.

Artículo 15. *Determinación de los apoyos.* La naturaleza de los apoyos que la persona titular del acto jurídico desee utilizar podrá establecerse mediante la declaración de voluntad de la persona titular del acto jurídico o a través de la realización de una valoración de apoyos. Dicha valoración será aprobada por la persona titular del acto jurídico o, en los procesos de adjudicación de apoyos iniciados por persona distinta a la titular del acto, por la autoridad judicial.



La valoración de apoyos podrá ser realizada por entes públicos o privados, siempre y cuando sigan los lineamientos y protocolos establecidos por el ente rector de la Política Nacional de Discapacidad.

Cualquier persona podrá solicitar de manera gratuita el servicio de valoración de apoyos ante los entes públicos que presten dicho servicio.

En todo caso, el servicio de valoración de apoyos deberán prestarlo como mínimo, la Defensoría del Pueblo, los entes territoriales a través de las gobernaciones y de las alcaldías en el caso de los distritos, y los juzgados de familia.

Parágrafo 1°. El ente rector de la Política Nacional de Discapacidad, en un plazo no superior a un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley y, en consulta, con el Consejo Nacional de Discapacidad, expedirá los lineamientos y el Protocolo Nacional para la realización del perfil de apoyos de las personas que lo soliciten, los cuales deben estar acordes con los estándares internacionales en la materia y actualizarse periódicamente. Adicionalmente, aprobará y ejecutará un plan de capacitación sobre los mismos, el cual también deberá ser consultado con el Consejo Nacional de Discapacidad.

Parágrafo 2°. El ente rector de la Política Nacional de Discapacidad, en un plazo no superior a dieciocho (18) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley y en consulta con el Consejo Nacional de Discapacidad, reglamentará la prestación de servicios de valoración de apoyos que realicen las entidades privadas.

Artículo 16. *Defensor Personal*. En los casos en que la persona con discapacidad necesite apoyos pero no tenga ninguna persona a quien designar con este fin, el juez de familia designará un defensor personal, de la Defensoría del Pueblo, que preste los apoyos requeridos para la realización de los actos jurídicos que designe el titular.

CAPÍTULO IV

Acuerdos de apoyo para la celebración de actos jurídicos

Artículo 17. *Acuerdos de apoyo por escritura pública*. Los acuerdos de apoyo podrán constar en escritura pública, suscrita por la persona titular del acto jurídico y una o varias personas naturales que hayan adquirido la mayoría de edad, o entre la persona titular del acto y una o varias personas jurídicas, conferida conforme a las reglas contenidas en el Decreto número 960 de 1970 y aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Previo a la suscripción del acuerdo, el Notario deberá entrevistarse por separado con la persona titular del acto jurídico y verificar que el contenido del acuerdo de apoyo se ajuste a la voluntad de este y a la ley.

Es obligación del Notario garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para las otras necesidades particulares que la persona requiera.



Con posterioridad a la suscripción del acuerdo, el Notario deberá poner de presente a la o las personas de apoyo sus obligaciones legales con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho.

Parágrafo 1°. La autorización de la escritura pública que contenga los acuerdos de apoyo, causará por concepto de derechos notariales la tarifa fijada para los actos sin cuantía.

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la aplicación inmediata del presente artículo una vez entre en vigencia, el Ministerio de Justicia y el Derecho, en un plazo no superior a un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, diseñará e implementará un plan de formación a Notarías sobre el contenido de la presente ley y sus obligaciones específicas en relación con los acuerdos de apoyo.

Artículo 18. *Acuerdos de apoyo ante Conciliadores Extrajudiciales en Derecho.* Los acuerdos de apoyo podrán realizarse ante los conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en los centros de conciliación. Durante la conciliación, el conciliador deberá entrevistarse por separado con la persona titular del acto y verificar que es su voluntad suscribir el acuerdo de apoyos.

Es obligación del centro de conciliación garantizar la disponibilidad de los ajustes razonables que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante, así como para las otras necesidades particulares que la persona requiera.

Durante el trámite, el conciliador deberá poner de presente a la o las personas de apoyo sus obligaciones legales con la persona titular del acto jurídico y dejar constancia de haberlo hecho.

Aquellos acuerdos de apoyo que sean realizados en centros de conciliación por medio de un acta de conciliación, no requerirán para su validez ser elevados a escritura pública.

Parágrafo. Sin perjuicio de la aplicación inmediata del presente artículo una vez entre en vigencia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en un plazo no superior a un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, diseñará e implementará un plan de formación a Centros de Conciliación sobre el contenido de la presente ley y sus obligaciones específicas en relación con los acuerdos de apoyo.

Artículo 19. *Duración de los acuerdos de apoyo.* Ningún acuerdo de apoyo puede extenderse por un período superior a cinco (5) años, pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la presente ley.

Artículo 20. *No exigibilidad de los acuerdos de apoyo.* En ningún caso será exigible un acuerdo de apoyos para la celebración de actos jurídicos o para garantizar su validez por parte de una tercera persona, independientemente de la naturaleza del mismo.

Artículo 21. *Terminación y modificación del acuerdo de apoyos.* La persona titular del acto puede terminar el acuerdo de apoyo previamente celebrado en cualquier momento.

El acuerdo de apoyo puede ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes en cualquier momento.



Cuando se modifiquen o se den por terminados los acuerdos de apoyo, la persona titular del acto deberá informar a los terceros interesados.

La persona designada como apoyo, cuando medie una justa causa, deberá comunicar al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a la modificación o terminación del apoyo, o que le impidan cumplir con sus funciones.

Artículo 22. *Responsabilidad frente a la otra parte en un negocio jurídico.* La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyos vigente debe notificar a las otras partes del negocio jurídico a celebrar de la existencia de un acuerdo de apoyos para su oponibilidad.

CAPÍTULO V

Adjudicación judicial de apoyos

Artículo 23. *Excepcionalidad de la adjudicación judicial de apoyos.* La adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos será de carácter excepcional, y se adelantará por medio de un proceso verbal sumario, o por medio del procedimiento de jurisdicción voluntaria, de acuerdo con las reglas señaladas en el Capítulo IX de la presente ley, ante el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto. El proceso deberá ser promovido por la persona titular del acto jurídico, salvo las excepciones previstas en la presente ley.

Artículo 24. *Valoración de apoyos.* En todo proceso de adjudicación de apoyos se contará con una valoración de apoyos sobre la persona titular del acto jurídico. La valoración de apoyos deberá acreditar el nivel y grados de apoyos que la persona requiere para determinadas decisiones al igual que las personas que conforman su red de apoyo y quiénes podrán asistir en determinadas decisiones.

Parágrafo. El Estado, a través de las entidades referidas en el artículo 15 de la presente ley, en coordinación con el ente rector de la política de discapacidad, en un término no superior a dieciocho (18) meses a partir de la promulgación de la presente ley, adoptarán las disposiciones necesarias para realizar la valoración de apoyos de que trata el presente artículo.

Artículo 25. *Revisión de la adjudicación de apoyos.* Cuando lo estime conveniente, el Juez del proceso, a petición de la persona titular del acto jurídico, la persona de apoyo, o de oficio, revisará los apoyos adjudicados para asegurar que los mismos se hayan ajustado a lo previsto en la presente ley. Cuando la sentencia que adjudica apoyos haya resultado de un proceso de adjudicación de apoyos promovido por persona distinta al titular del acto jurídico, el Juez del proceso hará la revisión de la adjudicación de apoyos de oficio un vez por año.

Artículo 26. *Modificación y terminación de la adjudicación de apoyos.* La persona titular del acto podrá solicitar, en cualquier momento, que se modifiquen o se levanten los apoyos adjudicados judicialmente.



La persona designada como apoyo, cuando medie justa causa, deberá comunicar al juez y al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias que puedan dar lugar a la modificación o terminación del apoyo, o que le impidan cumplir con sus funciones.

CAPÍTULO VI

Personas de apoyo

Artículo 27. *Obligaciones de las personas de apoyo.* Las personas de apoyo tienen las siguientes obligaciones:

- a) Guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto;
- b) Actuar de manera diligente, honesta y de buena fe conforme a los principios de la presente ley;
- c) Mantener y conservar una relación de confianza con la persona a quien presta apoyo;
- d) Mantener la confidencialidad de la información personal de la persona a quien presta apoyo;
- e) Las demás que le sean asignadas judicialmente o acordadas entre la persona titular del acto y la persona de apoyo.

Artículo 28. *Requisitos para ser persona de apoyo.* Para asumir el cargo de persona de apoyo se requiere:

- a) Ser una persona natural mayor de edad o una persona jurídica;
- b) Cuando la designación derive de un acuerdo de apoyos, la simple suscripción y el agotamiento de las formalidades del mismo, cuando sean del caso, implicará que el cargo de persona de apoyo ha sido asumido;
- c) Cuando la designación derive de un proceso de adjudicación de apoyos, la posesión se hará ante el juez que hace la designación.

Artículo 29. *Representación de la persona titular del acto.* La persona de apoyo representará a la persona titular del acto sólo en aquellos casos en donde exista un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre y representación, o en aquellos casos en donde el acto jurídico a celebrar represente la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona, cuando el titular del acto se encuentra absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad por cualquier medio posible.

En el caso en que no exista un mandato expreso para representar a la persona titular del acto, la persona de apoyo deberá solicitar autorización del juez que adjudicó el apoyo para actuar en representación de la misma, demostrando que el acto jurídico a celebrar refleja la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de esta.



Artículo 30. *Formas de apoyo que no implican representación.* Las personas de apoyo podrán llevar a cabo las siguientes acciones, siempre y cuando estén contempladas en el acuerdo de apoyos o en la sentencia de adjudicación de apoyos, sin que las mismas impliquen actos de representación:

- a) Asistir y hacer recomendaciones a la persona titular del acto en relación con el acto jurídico a celebrar;
- b) Interpretar la expresión de voluntad de la persona titular del acto jurídico en la realización del mismo;
- c) Cualquier otra forma de apoyo que se establezca por medio del acuerdo de apoyos o en la sentencia de adjudicación de apoyos.

Artículo 31. *Responsabilidades de las personas de apoyo.* La responsabilidad de las personas de apoyo, frente a sus funciones como apoyo, será individual sólo cuando en su actuar hayan contravenido los mandatos de la presente ley o hayan ido en contravía manifiesta de las indicaciones convenidas en los acuerdos de apoyo, las directivas anticipadas o la sentencia de apoyos, y por ello se hayan causado daños al titular del acto jurídico o frente a terceros.

Las personas de apoyo no serán responsables por los daños personales o financieros de la persona titular del acto jurídico siempre y cuando hayan actuado conforme a la voluntad y preferencias de la persona.

CAPÍTULO VII

Evaluación de desempeño de apoyos

Artículo 32. *Evaluación de desempeño de apoyos.* Al término de cada año desde la suscripción del acuerdo de apoyos o la vigencia de la sentencia de adjudicación de apoyos, la persona o personas de apoyo deberán realizar un balance en el cual se exhibirá a la persona titular de los actos ejecutados, y al Juez, en los casos en que el apoyo haya sido designado en proceso de adjudicación: i) el tipo de apoyo que prestó en los actos jurídicos en los cuales tuvo injerencia, ii) las razones que motivaron la forma en que prestó al apoyo, con especial énfasis en cómo estas representaban la voluntad y preferencias de la persona, y iii) la persistencia de una relación de confianza entre la persona de apoyo y el titular del acto jurídico.

Parágrafo. Quienes estén interesados en ser citados a participar de la gestión de apoyos, en el caso en que haya apoyos designados judicialmente, deberán informar al Juez a más tardar diez (10) días hábiles antes del cierre del año del que trata el inciso anterior, a efectos de que el Juez les comunique la fecha de la audiencia. El no solicitar oportunamente la convocatoria, releva al Juez de la carga de citar al o a las personas interesadas, lo que no impide su participación en la audiencia.

CAPÍTULO VIII

Directivas anticipadas



Artículo 33. *Directivas anticipadas.* Las directivas anticipadas son un tipo de apoyo formal por medio del cual una persona, mayor de edad, puede tomar decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos con antelación a los mismos. Estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, asuntos financieros o asuntos personales, entre otros. En todo caso, la suscripción de una directiva anticipada no invalida la voluntad expresada por la persona titular del acto con posterioridad a la suscripción de la misma, salvo en aquellos casos en que en ella se estipule una cláusula de voluntad perenne, la cual sólo podrá ser anulada por los procedimientos establecidos en el artículo 36 de la presente ley.

Las decisiones expresadas con anterioridad al acto jurídico por medio de una directiva anticipada son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo designadas a través de la directiva anticipada y que hayan asumido dicho cargo conforme a las reglas del artículo 28 de la presente ley. Las decisiones expresadas a través de una directiva anticipada serán de obligatorio cumplimiento para el tercero siempre y cuando se trate de obligaciones de no hacer y sean acordes con la ley, o cuando representen la aceptación anticipada de un procedimiento médico.

Parágrafo 1°. Lo establecido en la directiva anticipada y los alcances que tenga la misma respecto a la actuación de las personas de apoyo, deberá surtir el mismo trámite señalado en los artículos 17 y 18 de la presente ley para ser válida.

Parágrafo 2°. Aquellas personas distintas a la persona titular del acto, que adquieran obligaciones de hacer en cumplimiento de la voluntad expresada de manera anticipada por medio de una directiva anticipada, y que suscriban la misma, se entenderán como personas de apoyo y estarán sujetos a las reglas establecidas para estos en la presente ley.

Artículo 34. *Contenido de las directivas anticipadas.* Las directivas anticipadas deberán constar por escrito y contener, como mínimo, los siguientes aspectos:

- a) Ciudad y fecha de expedición del documento;
- b) Identificación de la persona titular del acto jurídico que realiza la directiva y, en caso de estar realizándola con personas de apoyo, la identificación de las mismas;
- c) Si hay personas de apoyo colaborando con la creación del documento, se deberá dejar constancia de haber discutido con la persona beneficiaria de la directiva las consecuencias o implicaciones de dichos actos para su vida;
- d) La manifestación de voluntad de la persona titular del acto jurídico en la que señale las decisiones anticipadas que pretende formalizar;
- e) Firma de la persona titular del acto jurídico.

Parágrafo. La directiva anticipada deberá ser suscrita por las personas de apoyo en ella designadas, cuando la misma prevea la necesidad de designar personas de apoyo para decisiones futuras que no se encuentren previamente expresadas en la misma.



Artículo 35. *Ajustes razonables relacionados con las directivas anticipadas.* En caso de que la persona titular del acto jurídico, requiera la realización de ajustes razonables para la suscripción de la directiva anticipada, será obligación del notario o del Centro de Conciliación, según sea el caso, los ajustes razonables necesarios.

Parágrafo. Las declaraciones de la directiva anticipada podrán ser expresadas mediante cualquier forma de comunicación, y podrá realizarse a través de videos o audios y otros medios tecnológicos, así como a través de lenguajes alternativos de comunicación que permitan establecer con claridad tanto el contenido de la declaración como la autoría, siempre y cuando se realicen en presencia de notario o conciliador inscrito ante un Centro de Conciliación y contengan los elementos de que trata el artículo 34 de la presente ley. De ello se dejará la respectiva constancia en un acta o elevarse a escritura pública, según sea el caso, que sustenta la expresión de la directiva anticipada mediante esta clase de medios. El documento que se levante cumplirá el requisito de constar por escrito al que se refiere el artículo 34 de la presente ley.

Artículo 36. *Modificación, sustitución y revocación.* El documento de directiva anticipada puede ser modificado, sustituido o revocado en cualquier momento por quien lo suscribió, mediante el mismo trámite surtido para su creación. Estas acciones se entenderán de la siguiente manera:

a) *Modificación:* El documento de directiva anticipada se entenderá modificado cuando se cambie de manera parcial el contenido de este sin privarle de efectos;

b) *Sustitución:* El documento de directiva anticipada se entenderá sustituido cuando se le prive de efectos al contenido, otorgando efectos a uno nuevo en su lugar;

c) *Revocación:* El documento de directiva anticipada se entenderá revocado cuando se retiren los efectos del contenido del mismo de manera definitiva.

Parágrafo. Para que se entienda realizada alguna de las anteriores acciones, se deberá realizar un documento con los mismos requisitos para la creación de la directiva anticipada, señalando explícitamente la voluntad de modificar, sustituir o revocar la directiva anticipada. Es obligación de la persona titular del acto informar de la modificación, sustitución o revocación de la directiva anticipada a las personas designadas como apoyo en la misma, cuando sea el caso.

Artículo 37. *Cláusula de voluntad perenne.* La persona titular del acto jurídico que realice una directiva anticipada, podrá incluir en la misma una cláusula de voluntad perenne, por medio de la cual invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad que exprese con posterioridad a la suscripción de la directiva anticipada, siempre que contradigan las decisiones establecidas en esta. Dicha cláusula podrá ser modificada, sustituida o revocada conforme a las reglas establecidas en el artículo precedente.

Artículo 38. *Publicidad de la directiva anticipada.* Cualquier persona podrá allegar una copia u original de la directiva anticipada con el fin de que sea tenida en cuenta por terceros con el fin de



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

garantizar el cumplimiento de las decisiones expresadas de manera anticipada en la misma. Igualmente, podrá informar sobre la existencia de una directiva anticipada para que los familiares o personas de apoyo puedan realizar los trámites pertinentes y aportar copia u original de la misma ante terceros, de tal manera que se garantice la voluntad de la persona titular del acto jurídico.

Artículo 39. *Incorporación de la directiva anticipada en la historia clínica.* Cuando la persona titular del acto jurídico que suscriba una directiva anticipada lo desee, podrá solicitar que se incorpore en la historia clínica una copia de la escritura pública o acta de conciliación mediante la cual se constituyó la directiva anticipada, como anexo de la historia clínica, con el fin de garantizar el respeto de las decisiones establecidas en la misma, siempre que las decisiones allí contenidas tenga relación con la atención en salud que decide o no recibir.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, reglamentará igualmente el proceso de incorporación de las directivas anticipadas en la historia clínica en un plazo no superior a un (1) año, contado a partir de la promulgación de la presente ley.

CAPÍTULO IX

Procedimiento de adjudicación, modificación y terminación de adjudicación judicial de apoyos

Artículo 40. Modifíquese el numeral 7 contenido en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012, quedará así:

7. De la adjudicación, modificación y terminación de apoyos adjudicados judicialmente.

Artículo 41. Modifíquese el numeral 6 del artículo 577 de la Ley 1564 de 2012, así:

Artículo 577. *Asuntos sujetos a su trámite.* Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes casos:

6. La adjudicación, modificación o terminación de apoyos adjudicados judicialmente, solicitada por la persona titular del acto.

Artículo 42. *Adjudicación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico.* El artículo 586 de la Ley 1564 de 2012 quedará así:

Artículo 586. *Adjudicación de apoyos en la toma de decisiones.* Para la adjudicación de apoyos promovida por la persona titular del acto jurídico, se observarán las siguientes reglas:

1. La demanda que eleve la persona no tendrá formalidad alguna, y podrá presentarse por cualquier medio, siempre que conste la voluntad expresa de la persona de solicitar apoyos en la toma de decisiones.

2. En el auto admisorio de la demanda se ordenará citar a las personas que hayan sido identificadas por la persona titular del acto como apoyos, si es el caso, y a quienes consideren tienen una relación de confianza con la misma y se ordenará la valoración de apoyos.

3. El informe de valoración de apoyos deberá consignar:

- a) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en los aspectos que la persona considere relevantes;
- b) Los ajustes que la persona requiera para participar activamente del proceso;
- c) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas;
- d) Las personas que pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida;
- e) Un informe general sobre el proyecto de vida de la persona.

4. Recibido el informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días.

5. Resueltas las objeciones, si las hubiere, y vencido el término probatorio, se dictará sentencia; en esta se hará claridad frente a la adjudicación de apoyos en relación con los distintos tipos de actos jurídicos, ordenará los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes y las demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona.

6. Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente para decidir sobre el mismo.

Artículo 43. Adjudicación de apoyos para la toma de decisiones promovida por persona distinta al titular del acto jurídico, y el artículo 396 de la Ley 1564 de 2012 quedará así:

Artículo 396. El proceso de adjudicación de apoyos promovido por persona distinta al titular del acto jurídico se observarán las siguientes reglas:

1. La demanda que eleve la persona deberá ser acompañada de un escrito donde se demuestre el interés legítimo del demandante frente a la adjudicación de apoyos para la persona titular del acto, y las circunstancias que demuestren que la persona titular del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad por cualquier medio posible.

2. En el auto admisorio de la demanda se ordenará citar a la persona titular del acto, cuando fuera posible, y a quienes consideren tienen una relación de confianza con la persona.

3. Admitida la demanda el Juez decretará las pruebas que estime convenientes y ordenará la valoración de apoyos.

4. El informe de valoración de apoyos deberá consignar:

- a) La verificación que permita concluir que la persona titular del acto jurídico se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad por cualquier medio posible;



b) Los apoyos que la persona requiere para la comunicación y la toma de decisiones en los aspectos relativos a manejo financiero, toma de decisiones en salud, y los demás que se consideren relevantes;

c) Los ajustes que la persona requiera para participar activamente del proceso;

d) Las sugerencias frente a mecanismos que permitan desarrollar las capacidades de la persona en relación con la toma de decisiones para alcanzar mayor autonomía en las mismas;

e) Las personas que pueden fungir como apoyo en la toma de decisiones de la persona, para cada aspecto relevante de su vida;

f) Un informe general sobre el proyecto de vida de la persona.

5. Recibido el informe de valoración de apoyos, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes correrá traslado del mismo, por un término de diez (10) días.

6. Resueltas las objeciones, si las hubiere, y vencido el término probatorio, se dictará sentencia; en esta se hará claridad frente a la adjudicación de apoyos en relación con los distintos tipos de decisiones, ordenará los programas de acompañamiento a las familias cuando sean pertinentes, y las demás medidas que se consideren necesarias para asegurar la autonomía y respeto a la voluntad y preferencias de la persona.

7. Se reconocerá la función de apoyo de las personas designadas para ello. Si la persona designada como apoyo presenta dentro de los siguientes cinco (5) días excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente para decidir sobre el mismo.

Artículo 44. En el proceso de adjudicación de apoyos, el juez de familia deberá tener presente, además de lo dispuesto en la presente ley, los siguientes criterios:

a) En todos los procesos de adjudicación judicial de apoyos se deberá tener en cuenta y favorecer la voluntad y preferencia de la persona titular del acto frente al tipo y la intensidad del apoyo que desea recibir para la celebración del mismo. La participación de la persona en el proceso de adjudicación es indispensable, so pena de nulidad del proceso, salvo las excepciones previstas en la ley;

b) Se deberá tener en cuenta la relación de confianza entre la persona titular del acto y la o las personas que serán designadas para prestar apoyo en la celebración de los mismos;

c) Se podrán adjudicar distintas personas de apoyo para distintos actos jurídicos en el mismo proceso;

d) La valoración de apoyos que se haga en el proceso deberá ser llevada a cabo de acuerdo a las normas técnicas establecidas para ello.

Artículo 45. El artículo 587 de la Ley 1564 de 2012, quedará así:

Artículo 587. *Modificación y terminación de la adjudicación de apoyos.* La persona titular del acto podrá solicitar la terminación o modificación de los apoyos adjudicados en cualquier momento.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

El Juez deberá notificar de ello a las personas designadas como apoyo y correrá traslado de diez (10) días de la solicitud para que estas se pronuncien al respecto.

En caso de no presentarse oposición por ninguna de las personas designadas como apoyo, el Juez modificará o terminará la adjudicación de apoyos, conforme a la solicitud.

En caso de presentarse oposición por parte de una de las personas de apoyo se ordenará una valoración de apoyos, con base en la cual el juez decidirá sobre la modificación o terminación de la adjudicación de apoyos.

Artículo 46. Unidad de actuaciones y expedientes. Cualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del Juez que haya declarado la sentencia adjudicando apoyos.

Cada despacho contará con un archivo de expedientes inactivos sobre las personas a quienes se les haya adjudicado apoyos en la toma de decisiones del cual se pueden retomar las diligencias, cuando estas se requieran. En el evento de requerirse el envío al archivo general, estos expedientes se conservarán en una sección especial que permita su desarchivo a requerimiento del juzgado.

Parágrafo. El expediente de quienes hayan terminado la adjudicación de apoyos, que no haya tenido movimiento en un lapso superior a dos (2) años, podrá ser remitido al archivo general. Un nuevo proceso de adjudicación de apoyos con posterioridad, hará necesario abrir un nuevo expediente.

También será causa de archivo general la muerte de la persona.

CAPÍTULO X

Régimen de transición

Artículo 47. Vigencia. Las disposiciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia a partir de su promulgación, con excepción de aquellos artículos que establezcan un plazo para su implementación y los artículos contenidos en el Capítulo IX de la presente ley, los cuales entrarán en vigencia dieciocho (18) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 48. Prohibición de interdicción. Queda prohibido iniciar procesos de interdicción o inhabilitación, o solicitar la sentencia de interdicción o inhabilitación para dar inicio a cualquier trámite público o privado, a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 49. Proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio. Hasta tanto entren en vigencia los artículos contenidos en el Capítulo IX de la presente ley, el juez de familia del domicilio de la persona titular del acto jurídico puede determinar de manera excepcional los apoyos necesarios para una persona mayor de edad cuando esta se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad por cualquier medio, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de la persona titular del acto.

El proceso de adjudicación judicial de apoyos transitorio será promovido por una persona con interés legítimo y que acredite una relación de confianza con la persona titular del acto.

El juez, por medio de un proceso verbal sumario, determinará la persona o personas de apoyo que asistirán a la persona titular del acto jurídico, teniendo en cuenta la relación de confianza, amistad, parentesco o convivencia entre estos y la persona titular. La sentencia de adjudicación de apoyos fijará el alcance de los apoyos teniendo en cuenta las normas establecidas en la presente ley, al igual que el plazo del mismo, el cual no podrá superar la fecha final del periodo de transición.

La persona titular del acto jurídico podrá oponerse a la adjudicación judicial de apoyos en cualquier momento del proceso.

Artículo 50. *Procesos de interdicción o inhabilitación en curso.* Aquellos procesos de interdicción o inhabilitación que se hayan iniciado con anterioridad a la promulgación de la presente ley, deben ser suspendidos y se consultará con la persona titular del acto si este desea realizar un acuerdo de apoyos o directiva anticipada conforme a las normas establecidas en la presente ley. En aquellos casos en donde la persona titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitada para manifestar su voluntad por cualquier medio posible, el juez de familia que adelantaba el proceso de interdicción, una vez acreditada la anterior condición, al proceso de adjudicación de apoyos transitorio, con sujeción a los principios que rigen la presente ley.

Artículo 51. *Personas que se encuentran bajo medida de interdicción o inhabilitación.* Aquellas personas que contaran con sentencia de interdicción o inhabilitación anterior a la promulgación de la presente ley, desde la entrada en vigencia de la presente ley se entenderán como personas con capacidad legal plena. Sin perjuicio de lo anterior, en un plazo no superior a dieciocho (36) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicción o inhabilitación deberán citar a las personas que estaban bajo medida de interdicción o inhabilitación, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si se requiere la adjudicación judicial de apoyos, conforme a las normas de la presente ley.

Las personas que se encontraban bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán acudir directamente ante el juzgado para solicitar que se revise su situación jurídica, una vez entre en vigencia las normas contenidas en el Capítulo IX de la presente ley.

CAPÍTULO XI

Derogatorias y disposiciones finales

Artículo 52. *Derogatorias.* Quedan derogados los numerales 5 y 6 contenidos en el artículo 22 de la Ley 1564 de 2012; el ordinal 7° contenido en el artículo 2189 del Decreto número 410 de 1971; el ordinal 3° del artículo 127, el ordinal 2° del artículo 1061 y el ordinal 3° del artículo 1068 de la Ley



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

57 de 1887; los artículos 1° a 4°, 6° a 12 y 14 a 120 de la Ley 1306 de 2009 y las demás normas que sean contrarias a esta ley.

Se firma por los autores y coautores,

CONSULTAR NOMBRES Y FIRMAS EN FORMATO PDF

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley es fruto del cuidadoso trabajo llevado a cabo por la Mesa Técnica conformada para el efecto por el Consejo Nacional de Discapacidad, de la cual hicieron parte el Plan Presidencial para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad Administrativa para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Asociación Colombiana de Síndrome de Down (Asdown), el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes (PAIIS), la Universidad Externado de Colombia y algunos activistas independientes por los derechos de las personas con discapacidad, entre otros.

1. La obligación del Estado colombiano de implementar el nuevo paradigma sobre los derechos de las personas con discapacidad

Colombia, el 10 de mayo de 2011, se integró a la lista de países que ratificaron la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD). La ratificación de la CDPD generó, para Colombia, la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de la población de personas con discapacidad y armonizar su legislación interna para asegurar el goce efectivo de dichos derechos. La CDPD, al tratarse de un instrumento internacional de Derechos Humanos ratificada por Colombia, y en consideración a lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política, se entiende incorporada al bloque de constitucionalidad y, por ende, sus disposiciones prevalecen en el orden interno.

Una de las principales obligaciones que surge de la ratificación de la CDPD, consiste en el cambio de paradigma sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así, históricamente se pueden identificar tres principales modelos por medio de los cuales se ha concebido el concepto de discapacidad, y cuya concepción ha determinado el trato que reciben las personas con discapacidad.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

En ese sentido, los tres modelos de la discapacidad predominantes han sido el modelo de la prescindencia, el modelo médico-rehabilitador y el modelo social^{1[1][1]}.

Bajo el modelo de la prescindencia, la discapacidad es entendida como un castigo o maldición^{2[2][2]}, por lo que las personas con discapacidad son concebidas como inútiles y se legitima prescindir de ellas, motivo por el cual la sociedad les rechaza o aísla de la vida en comunidad. En ese sentido, la sociedad plantea dos respuestas a la discapacidad: la eugenesia o la marginación. Un ejemplo histórico de la primera se puede rastrear al Holocausto Nazi, donde las *deformidades físicas o mentales* eran consideradas tendencias criminales o demoniacas y, a través de la Ley para la Prevención de Descendencia Genéticamente Defectuosa, se realizaron esterilizaciones a personas con discapacidad y se dispuso de mecanismos de exterminio como envenenamiento por monóxido de carbono, dando como resultado la muerte de cerca de un millón de personas con discapacidad^{3[3][3]}.

Por su parte, un ejemplo de la marginalización de las personas con discapacidad bajo el modelo de prescindencia se puede rastrear en la edad media, en donde la presencia de una discapacidad generalmente significaba el abandono de niños y niñas a manos de organizaciones religiosas que creaban asilos y orfanatos donde abundaban las personas con discapacidad^{4[4][4]}.

En cuanto al modelo médico-rehabilitador, este entiende la discapacidad como la presencia de un diagnóstico médico, equiparando discapacidad con enfermedad y generando una visión de las personas con discapacidad como *enfermos*, siendo la función de la sociedad y el Estado *curar* o *normalizar* a la persona con discapacidad. La respuesta de este modelo tiene como consecuencia la exclusión de las personas con discapacidad de la vida social, pues la principal función del accionar social y estatal es *curar* la discapacidad, y no la inclusión de las personas con discapacidad. En últimas, la discapacidad sigue estando centrada en la persona con discapacidad y es intrínseca a la persona.

Por último, el modelo social de la discapacidad entiende que la discapacidad es el resultado de unas características funcionales y las barreras sociales con las que se enfrentan las personas con estas características. Así, la discapacidad ya no es un elemento intrínseco a la persona, sino el resultado de una sociedad inaccesible o no inclusiva. Esta forma de concebir la discapacidad nace del reclamo de

^{1[1][1]} PALACIOS, Agustina. El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. Madrid; Grupo editorial CINCA, 2008.

^{2[2][2]} Op cit PALACIOS.

^{3[3][3]} EVANS Suzanne. Forgott en Crimes. The Holocaust and People with Disabilities. Universidad de Michigan. 11 junio de 2008.

^{4[4][4]} SCHEERENBERGER, R.C., Historia del retraso mental, en Op Cit PALACIOS. Pg. 59.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

las personas con discapacidad durante los años sesenta, principalmente en Europa y Estados Unidos, que buscaban cambiar el foco de atención, de su diversidad funcional, a las barreras sociales y ambientales^{5[5]}. Bajo este modelo, la respuesta social pasa de ser la exclusión, marginalización o normalización de las personas con discapacidad, a la eliminación de las barreras, bien sean ambientales o sociales, que limitan o niegan el acceso a los derechos a las personas con características funcionales diversas.

Este último modelo es el adoptado por la CDPD, la cual entiende la discapacidad como ¿un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás¿^{6[6]}. Bajo esta premisa, entonces, la obligación del Estado colombiano bajo la convención implica desarrollar el postulado del modelo social de la discapacidad, bajo el cual se deben identificar las barreras que impiden el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Prescindencia	Médico-Rehabilitador	Social (modelo adoptado por la CDPD)
La discapacidad como una maldición, un castigo. La respuesta social es eliminarla de la vida en comunidad. Las PCD son ¿inválidas¿ e inútiles para la sociedad.	La discapacidad como una enfermedad, como algo que debe ¿curarse¿, ¿arreglarse¿, ¿prevenirse¿. La respuesta social es la ¿normalización¿ desde el punto de vista médico-funcional. La respuesta legal es otorgar voz ¿experta¿ a la ciencia médica o al derecho, en donde se niega la capacidad jurídica para ¿protegerles¿ (interdicción).	La discapacidad como una manifestación de la diversidad humana. La discapacidad es el resultado de la interacción entre las diferencias funcionales y las barreras en el entorno. La respuesta social es identificar las barreras y garantizar la vida en comunidad.
La respuesta legal es la negación de la ciudadanía		La respuesta legal es reconocimiento pleno de la ciudadanía, promoción de la

^{5[5]} BARNES, C. y MERCER, G., Disability, op cit., capítulo 1, ABBERLEY, P., ¿The concept of oppression and the development of a social theory of disability¿, Disability, Handicap. En: PALACIOS.

^{6[6]} Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2006, preámbulo, literal e.



Precendencia	Médico-Rehabilitador	Social (modelo adoptado por la CDPD)
(interdicción), la institucionalización forzada y el asistencialismo (objetos de la caridad).		autonomía y toma de decisiones con apoyo.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El Modelo Social de Discapacidad se encuentra desarrollado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue firmada por el Estado colombiano el 30 de marzo de 2007, aprobada por el Congreso de la República a través de la Ley 1346 de 2009 y, finalmente, ratificada el 10 de mayo de 2011.

La Convención, primer instrumento internacional de Derechos Humanos del Siglo XXI, no crea derechos nuevos para las personas con discapacidad. Por el contrario, reconoce a esta población los mismos derechos que ostentan todas las personas, determinando un enfoque diferencial particular para la concreción efectiva de los mismos.

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad determina que la discapacidad se genera cuando un cuerpo con diversidad se encuentra con una barrera que le impide acceder a un servicio o ejercer un determinado derecho. A partir de esta noción, la responsabilidad que en algún momento estuvo en cabeza del individuo ¿de curarse por ejemplo¿, es trasladada al conglomerado social, en tanto es el responsable de la generación de barreras. La persona con discapacidad es distinta, pero no inferior.

La ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha significado en el mundo entero la necesidad de repensar los esquemas públicos y privados en torno a esta población, y de impulsar una transformación cultural que dé cabida a la desaparición de preconcepciones ligados a la invalidez de los sujetos con discapacidad, como quiera que este instrumento internacional impone a los países el deber de proceder a abolir en sus ordenamientos jurídicos y políticas públicas, toda referencia que pueda ser discriminatoria, al igual que están llamados a combatir los estereotipos y prejuicios, promover la conciencia sobre las habilidades de las personas con discapacidad, eliminar las barreras que impiden acceder a la movilidad, la información y las comunicaciones, promover la vida autónoma e, y asegurar a esta comunidad el reconocimiento de la capacidad jurídica y el acceso a la justicia, entre otros aspectos de especial relevancia.

Así las cosas, desde el momento en que Colombia procedió a la ratificación de este tratado, surgió para ella la obligación de efectuar todas las modificaciones que sean requeridas para adoptar ajustes



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

razonables que hagan efectiva la igualdad material para las personas con discapacidad a través de la abolición de barreras que obstaculizan su desarrollo individual y participación social, lo que abarca, como se ha expuesto, el replanteamiento de las políticas públicas y la reformulación del escenario jurídico.

Fuerza vinculante para Colombia de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Teniendo en consideración que se trata de un instrumento internacional de Derechos Humanos y que el artículo 93 de la Constitución Política consagra que estos se integran al texto constitucional a través del bloque de constitucionalidad, las disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevalecen en el orden interno y *¿sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizadas como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes?*^{7[7][7]}.

En otras palabras, la sociedad y las instituciones colombianas deben a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad igual observancia que a los postulados de la Constitución Política, lo que a su vez significa que dado el principio de supremacía constitucional, todas las disposiciones de carácter legal y reglamentario que integran el ordenamiento jurídico colombiano deben estar acordes y en armonía con la Convención.

Así, la Convención no debe ser entendida como la expresión de una voluntad política estatal, sino como un texto o normativo, aplicable y exigible judicialmente con la misma fuerza vinculante del texto superior.

A partir de este reconocimiento, Colombia está llamada a modificar por completo el enfoque que históricamente ha brindado a la discapacidad, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional al precisar que *¿La protección de los Derechos Humanos de estas personas se regula desde un modelo social, en el que se entenderá la discapacidad como una realidad y no como una enfermedad que se debe superar a toda costa, es decir, desde un punto de vista en el que se acepta la diversidad y la diferencia social?*^{8[8][8]}.

2. El Modelo Social de la Discapacidad y el Mandato de Armonización del Régimen de Capacidad Legal a los estándares del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La CDPD, el instrumento más avanzado de Derechos Humanos de las personas con discapacidad y que contó con su participación directa en la formulación de su contenido, adopta abiertamente el

^{7[7][7]} Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-067/03.

^{8[8][8]} Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-850/14.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

modelo social. Este modelo parte de que la discapacidad está en las barreras en el entorno y que impone la sociedad. Esto quiere decir que ya deja de considerarse la discapacidad como un problema de la persona, como un diagnóstico o un castigo, y debe asumirse como un problema social estructural. Como consecuencia, la sociedad debe eliminar las barreras de todo tipo que generan la discapacidad para promover la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad.

La Corte Constitucional ha afirmado que este modelo debe guiar la interpretación constitucional de la normativa relacionada con las personas con discapacidad:

¿La jurisprudencia constitucional, a partir de estas premisas, ha concluido que el modelo social es el marco de referencia de las previsiones del bloque de constitucionalidad contenidas en el CDPD. Por lo tanto, como en esta sentencia se ha señalado que ese instrumento de Derechos Humanos es el estándar más alto de protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad, conforma el parámetro de interpretación sobre el contenido y alcance de las prerrogativas constitucionales a favor de esa población, de acuerdo con la regla hermenéutica contenida en el inciso 1° del artículo 93 C.P.^{9[9][9]}.

Frente a la capacidad jurídica, el artículo 12 de la Convención, sobre el igual reconocimiento como personas ante la ley, consagra que ¿[l]os Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida¿, y que están encargados de adoptar ¿las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica¿. En pocas palabras esto quiere decir que ya no son admisibles los sistemas que admitan la negación total o parcial de las personas con discapacidad. Por el contrario, las normas y las prácticas sociales deben reconocer en toda ocasión la capacidad legal de todas las personas.

Este nuevo paradigma contradice la tradición histórica, pues ya no admite la ficción jurídica que restringía la capacidad de ejercicio, diferenciándola de la capacidad de goce. La importancia de este nuevo paradigma hace que sea central en la Convención, pues es parte inescindible del reconocimiento de la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad. Por este motivo, el Comité de la Convención eligió desarrollar conceptualmente el artículo 12 en su primera Observación General, emitida en 2014.

La Observación General número 1 afirma categóricamente que la capacidad jurídica es un ¿atributo universal inherente a todas las personas en razón de su condición humana y debe defenderse

^{9[9][9]} CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-066-13. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás;^{10[10][10]}. Como consecuencia,

El artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en cambio, deja en claro que el «desequilibrio mental» y otras denominaciones discriminatorias no son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica (ni la capacidad legal ni la legitimación para actuar). En virtud del artículo 12 de la Convención, los déficits en la capacidad mental, ya sean supuestos o reales, no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica^{11[11][11]}.

Esto quiere decir que el concepto central de la capacidad jurídica ya no debe ser la supuesta (in)capacidad para tomar decisiones. En el nuevo paradigma el punto de partida es que todas las personas pueden expresar su voluntad y preferencias, así que el núcleo de la capacidad jurídica es la toma de decisiones con apoyo.

Así las cosas, el concepto de apoyos para la toma de decisiones y las salvaguardas son principales para entender el funcionamiento concreto de los esquemas de capacidad legal. Estos conceptos ponen en el centro la voluntad y autonomía de la persona con discapacidad, superando por completo los sistemas que se sostienen a partir del «mejor interés» de la persona con discapacidad, en los que la decisión la toma un tercero.

En este mismo sentido se pronunció el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su revisión al informe inicial de Colombia, cuando expresó que:

[R]ecomienda al Estado Parte que adopte un plan para la revisión y modificación de toda la legislación que incluya la derogación inmediata de disposiciones que restrinjan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, incluyendo las Leyes 1306 (2009) y 1412 (2010), así como del Código Civil, el Código Penal y leyes adjetivas^{12[12][12]}.

Este proyecto de ley busca que el marco legal colombiano se ajuste al mandato del artículo 12 de la CDPD.

3. Resumen de la propuesta del proyecto de ley

^{10[10][10]} COMITÉ DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NACIONES UNIDAS. Observación General sobre el artículo 12: igual reconocimiento como persona ante la ley. XI período de sesiones, 30 de marzo a 11 de abril de 2014. P. 3.

^{11[11][11]} Íbid.

^{12[12][12]} COMITÉ DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Observaciones finales sobre el informe inicial de Colombia. 292ª sesión, 30 de septiembre de 2016. P. 2.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

¿ El presente proyecto de ley reconoce la capacidad legal de todas las personas con discapacidad mayores de edad, sin excepciones, y sin limitaciones, al ejercicio del mismo, con concordancia con el mandato del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿ Para ello, se reemplazan las figuras de la interdicción y la inhabilitación por sistemas de toma de decisiones con apoyo.

¿ Los apoyos se definen como ¿tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de sus derechos. Esto puede incluir la asistencia en la comunicación, la asistencia para la comprensión de determinados actos jurídicos y sus consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y preferencias personales¿.

¿ Se establecen tres (3) mecanismos de apoyo en la toma de decisiones:

¿ Los acuerdos de apoyo.

¿ La adjudicación judicial de apoyos.

¿ Las directivas anticipadas.

¿ La diversidad de mecanismos de apoyo permite que las personas con discapacidad, junto con las personas de apoyo, puedan generar sistema de apoyo en la toma de decisiones que se ajusten a sus necesidades y preserven la autonomía y dignidad de las personas con discapacidad, al tiempo que garantiza los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad legal.

¿ El proyecto de ley establece diversas salvaguardias a lo largo del articulado, diferenciadas dependiendo del mecanismo de apoyo que la persona con discapacidad escoja, con el fin de garantizar la protección de la autonomía y voluntad de las personas con discapacidad en Colombia.

¿ El proyecto de ley contempla un nutrido número de formas de prestar apoyos en la toma de decisiones, sin restringir los mismos a otros que la persona con discapacidad pueda requerir, cuyas intensidades permiten a las personas con discapacidad en Colombia ejercer su capacidad legal de maneras diferenciadas dependiendo de sus necesidades particulares.

¿ El proyecto de ley contempla un procedimiento de adjudicación judicial de apoyos iniciado por una persona diferente al titular, para aquellos casos en donde la persona se encuentra imposibilitada para manifestar su voluntad por cualquier medio, asegurando así el acceso a los apoyos a todas las personas que lo requieran.

4. El paradigma anterior sobre la capacidad legal contenido en el Código Civil y la Ley 1306 de 2009

Históricamente, no reconocer la capacidad jurídica ha sido una forma de limitar el ejercicio de la ciudadanía plena. La tradición de nuestro Código Civil no es ajena a esta tendencia y por eso no



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

reconocía la capacidad legal plena de las mujeres. Solamente 60 años después de la promulgación del Código Civil.

La Ley 28 de 1932 [¿] le dio plena capacidad civil para disponer y administrar [¿] su propiedad, sin limitación de ninguna especie; y, en cuanto hace a la persona de la mujer casada, el Decreto número 2820 de 1974, estableció que en las relaciones familiares ella se encuentra en pie de igualdad con el hombre.¹³[13]

Frente a las personas con discapacidad, este reconocimiento ha sido todavía más lento, pues apenas hasta el año 2007 fue presentado un proyecto de ley que finalmente reformó la interdicción. El **Proyecto de ley número 049 de 2007** de la Cámara de Representantes tenía un objetivo ambicioso, la reforma total del régimen de capacidad legal para ponerlo al día con los avances en diferentes materias, como los derechos fundamentales, las ciencias, ¿e incluso la administración empresarial.¹³[14][14]. En la exposición de motivos se aclaraba que una misión de esta envergadura no podía realizarse con pequeños ajustes, pues ¿la situación de discordancia entre las realidades fácticas de la sociedad moderna y las disposiciones jurídicas es de tal magnitud que llega a ser un despropósito intentar una simple labor de retoque institucional?¹⁴[15][15].

Este proyecto, al convertirse en ley, modificó la dinámica procesal de la interdicción, desarrolló el régimen de guardas y buscó limitar la institucionalización forzosa en hospitales psiquiátricos¹⁵[16][16]. Frente a la regulación anterior, tanto el régimen de guardas como los límites a la institucionalización forzosa suponían un control a los abusos de guardas y curadores. Adicionalmente, generó la obligación de revisar el proceso periódicamente y abrió la posibilidad de terminar la interdicción.

Sin embargo, el paradigma detrás del renovado marco legal es prácticamente el mismo que el del Código Civil. El núcleo de la interdicción no fue modificado, pues todavía permite sustraer la capacidad legal por motivos de discapacidad, que dividió en absoluta y relativa según criterios médicos¹⁶[17][17]. Es decir, sigue siendo un tercero quien toma las decisiones

¹³[14][14] Edgardo Maya Villazón, Guillermo Rivera, David Luna, et.al. Exposición de Motivos del Proyecto de ley número 049 de 2007 de la Cámara de Representantes. *Gaceta del Congreso*. 1º de agosto de 2007.

¹⁴[15][15] Íbid.

¹⁵[16][16] Marcia Rioux, Joan Gilmour y Natalia Ángel-Cabo. *Negotiating Capacity: Legally Constructed Entitlement and Protection EN Coercive Care: Rights, Law and Policy*. (Eds. Bernadette McSherry e Ian Freckelton). Routledge, 2013. NY.

¹⁶[17][17] La exposición de motivos del Proyecto de ley afirmaba que ¿[n]o se trata de dar capacidad a la persona con discapacidad mental, sino de establecer unas pocas y sanas excepciones en beneficio tanto de los intereses de la persona con discapacidad como de la sociedad¿.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

por la persona con discapacidad (un juez o jueza, un médico o médica o un familiar). Aunque intentó poner límite a las institucionalizaciones forzosas, en realidad permite que sean a largo plazo si un ¿experto¿ lo considera necesario, contrariando todos los estándares actuales de Derechos Humanos en la materia (Artículos 20-24, Ley 1306 de 2009)^{17[18][18]}.

El [relator] sigue recibiendo informes sobre el uso sistemático de intervenciones médicas forzosas en todo el mundo. **Al igual que los órganos de las Naciones Unidas, ha establecido que el tratamiento involuntario y otras intervenciones psiquiátricas en centros de atención de la salud son formas de tortura y malos tratos.** Las intervenciones médicas forzosas, que **suelen justificarse erróneamente alegando teorías de incapacidad y de necesidad terapéutica contrarias a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad**, se ven legitimadas por las leyes nacionales, y pueden llegar a gozar de un amplio apoyo público al realizarse en aras del presunto ¿interés superior¿ de la persona afectada. No obstante, en la medida en que infligen dolor o sufrimientos graves, contravienen la prohibición absoluta de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes (A/63/175, párrs. 38, 40 y 41). **Su preocupación por la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad hace que el Relator Especial inste a que se revise la legislación nacional que permite las intervenciones médicas forzosas**^{18[19][19]}.

En efecto, bajo los modelos de la discapacidad^{19[20][20]}, la interdicción responde a una combinación del modelo de prescindencia y del modelo médico-rehabilitador^{20[21][21]}. Bajo el modelo de prescindencia, la sociedad aísla a la persona con discapacidad, bien puede ser en instituciones o en su hogar. El efecto histórico de la interdicción ha sido segregar a las personas con discapacidad^{21[22][22]}. Bajo el modelo médico se entiende que la discapacidad es una cuestión de salud, lo que entrega a la medicina todo el poder sobre la vida de las personas con discapacidad^{22[23][23]}.

^{17[18][18]} Op. Cit. *Negotiating Capacity*¿ P. 61.

^{18[19][19]} Juan Ernesto Méndez, Informe del Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 22 periodo de sesiones, 1º de febrero de 2013. A/HRC/22/53. P. 15.

^{19[20][20]} Los modelos de la discapacidad son una conceptualización sobre las formas en las que las sociedades entienden la discapacidad y, como consecuencia, reaccionan a ella.

Agustina Palacios. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Madrid: Ed. Colección CERMI, 2008.

^{20[21][21]} Íbid.

^{21[22][22]} ¿

^{22[23][23]} Íbid.



INFORMACIÓN & SOLUCIONES

El efecto del modelo médico-rehabilitador en la Ley 1306 es la patologización de la discapacidad, ya que la define siempre como patología o deficiencia. También son propias de este modelo todas las normas que permiten el acceso a los derechos según ¿grados¿ de discapacidad, como ocurre con la Ley 1306 y la limitación de la capacidad jurídica según si la ¿discapacidad mental¿ de la persona es ¿absoluta o relativa¿. Por último, que sea un médico o médica quien tiene la última palabra sobre la valoración de la discapacidad es la forma en la que el derecho le entrega la autoridad a un profesional de la salud sobre la vida de una persona con discapacidad. Es el diagnóstico y la situación médica la que se convierten en la identidad de la persona. No en vano la exposición de motivos de la Ley 1306 de 2009 iniciaba así: ¿[e]l régimen legal actual de las personas que padecen (sic) algún tipo de trastorno mental (sic) que les impide comportarse (sic) adecuadamente en la sociedad¿^{23[24][24]}.

Los efectos de la interdicción, entonces, superan la simple esfera la protección patrimonial de las personas con discapacidad, para inmiscuirse en ámbitos tan íntimos y privados de estas, como lo son el derecho a contraer matrimonio, a decidir de manera autónoma sobre la autorización de medicamentos o procedimientos médicos, la decisión de ingresar libremente al mercado laboral, entre otras. La injerencia abusiva de terceros sobre aspectos tan individuales vulnera abiertamente la dignidad de las personas y desconoce su autonomía en la construcción y planteamiento del proyecto de vida personal. Son estos paradigmas de la discapacidad, precisamente, los que han sido totalmente revaluados y la Convención parte del modelo social de la discapacidad, como se mencionó con anterioridad, para plantear modelos de toma de decisiones con apoyos, como el establecido en el presente proyecto de ley, que permita a las personas con discapacidad en Colombia recuperar el derecho a decidir sobre su propia vida, con las salvaguardas y apoyos necesarios para ejercer su autonomía.

5. Análisis de Costo-Beneficio del proyecto de ley

El proyecto de ley no acarrea costos a la Nación, salvo algunos costos menores de implementación ya que distintos operadores de justicia, como es el caso de los juzgados de familia, los centros de conciliación y los notarios, deberán ser capacitados sobre la nueva normatividad y sus funciones en relación con la misma. De igual manera, algunas entidades públicas como son la Defensoría del Pueblo y los entes territoriales a través de las gobernaciones y las alcaldías en los casos de los Distritos, deberán capacitarse en los procesos de valoración de apoyos, lo cual generará costos de implementación. En este punto cabe resaltar que el Ministerio de Justicia y del Derecho ya ha adelantado procesos de capacitación en el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad bajo los estándares del artículo 12 de la CDPD, destinados a distintos operadores de justicia.

^{23[24][24]} Op Cit. Exposición de motivos¿



Sin embargo, cabe resaltar que los costos de implementación son mínimos en relación con los beneficios que el proyecto de ley plantea. Así, la posibilidad de crear acuerdos de apoyo por medio de documento privado elevado a escritura pública y por medio de actas de conciliación reducirá significativamente la carga del aparato judicial, el cual es el encargado bajo la legislación vigente de adelantar todos los procesos de interdicción e inhabilitación. Mientras que bajo la propuesta actual el proceso judicial de adjudicación de apoyos es excepcional y se privilegia la estipulación de acuerdos de apoyo, los cuales resultan más ágiles para las personas con discapacidad y sus respectivos apoyos. Adicionalmente, el reconocimiento de la capacidad legal de las personas con discapacidad en Colombia y su ejercicio por medio de sistemas de toma de decisiones con apoyo implica permitir el acceso al mercado de personas que en el régimen actual de capacidad legal se encuentran excluidos del tráfico jurídico.

Cabe resaltar que bajo la legislación vigente, en particular el artículo 28 de la Ley 1306 de 2009, el dictamen de interdicción se debe realizar por un equipo interdisciplinario, por lo que los costos de la valoración de apoyos judicial se reducen a la capacitación del equipo interdisciplinario al que hace alusión la norma previamente citada.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 4 de abril del año 2017 ha sido presentado en este Despacho el Proyecto de ley número 248 con su correspondiente exposición de motivos por los honorables Representantes *Carlos Guevara, Oscar Ospina, Álvaro López* y otros honorables Representantes. Honorables Senadores *Claudia López, Roy Barreras* y otros honorables Senadores. Doctor *Carlos Negret Mosquera*, Defensor del Pueblo.

El Secretario General,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

²⁴[13][13] CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-068 de 1999. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 10 de febrero de 1999.

